

La regla del previo agotamiento de los recursos internos en el sistema interamericano de derechos humanos.

Sebastián Fernando Vignoles

Sumario: 1. Introducción; 2. Antecedentes en el Derecho Internacional; 3. El objetivo de la institución en el Sistema Interamericano; 4. Su naturaleza jurídica; 5. Las características de los recursos que deben agotarse; 6. Las excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos internos; 7. El desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana; 8. Conclusión; 9. Bibliografía.

Introducción.

Una de las características fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la subsidiariedad, que proviene de una competencia compartida entre los Estados nacionales y la comunidad internacional para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, es deber de los Estados -y también su derecho- prevenir en el conocimiento y sanción de las violaciones de los derechos humanos en su territorio. De esta manera, las reclamaciones deben ser satisfechas en el ámbito doméstico, quedando reservadas las instancias internacionales sólo en los casos que las violaciones no hayan sido debidamente investigadas y reparadas en la jurisdicción interna.

Es por ello que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos establecen como regla general para admitir una petición o comunicación ante sus órganos correspondientes, el cumplimiento del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna del Estado que se pretende denunciar. Podemos agregar, además, que de todos los requisitos que exige una petición o comunicación en sede internacional, este es el más relevante, porque enlaza la esencia misma de los derechos humanos con los mecanismos creados para su protección. Incluso su inobservancia es la primera defensa que oponen los Estados denunciados ante organismos internacionales¹.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte Interamericana o Corte) ha sostenido que el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno de los pilares básicos fundamentales del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática².

En este mismo orden de ideas, la Corte ha señalado que la salvaguarda de los derechos de las personas frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo principal de la protección internacional de los derechos humanos. De esta manera, la inexistencia de recursos internos adecuados y efectivos coloca a la víctima en estado de indefensión³.

Puede afirmarse que esta circunstancia de desprotección cobra mayor envergadura en nuestro continente, que en décadas recientes ha experimentado graves violaciones a los derechos humanos cometidos o tolerados por ciertos gobiernos. Estas experiencias han evidenciado que los derechos fundamentales de las persona -como el derecho a la vida y a la integridad personal- son amenazados cuando las garantías judiciales, en particular el hábeas corpus, son total o parcialmente suspendidas. Esta realidad ya era conocida por quienes redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, Convención o Convención Americana), lo

1 Conf. PINTO, Mónica. 1993. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos Aires. Argentina: Editores del Puerto S.R.L., p. 58.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez, sentencia de del 3 de noviembre de 1997, párrafo 82.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 89.

que justifica que este instrumento internacional del sistema interamericano haya sido el primero en prohibir expresamente la suspensión de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos de las personas⁴.

Las razones expuestas nos llevan a estudiar esta institución del Derecho Internacional, para una mejor comprensión de sus orígenes, su naturaleza jurídica, sus características, su objetivo o finalidad y su interpretación dentro del sistema interamericano de derechos humanos, particularmente a partir de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión o Comisión Interamericana) y la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, a la luz del criterio que surge de sus sentencias y las opiniones consultivas emitidas. Cabe destacar que no resulta sencillo establecer en cada caso cuáles son los recursos disponibles, y a su vez, determinar cuáles son los que el peticionario se encuentra en la obligación de agotar⁵.

Antecedentes en el Derecho Internacional.

Sus antecedentes pueden rastrearse en el Derecho Internacional clásico, junto con el nacimiento del amparo diplomático, creado para que los Estados protejan a sus nacionales fuera de sus fronteras. Este instituto le permite hacer suyas las reclamaciones de sus nacionales contra terceros Estados; pero el Estado que intente hacer uso de la protección diplomática sólo puede intervenir luego que el individuo haya interpuesto y agotado todos los recursos internos. A partir de ello, surgiría la responsabilidad internacional del Estado infractor. Se trata de una regla sustantiva bien establecida del Derecho Consuetudinario, conforme lo ha sostenido la Corte Internacional de Justicia, según la cual los recursos internos deben haber sido agotados antes de iniciarse procedimientos internacionales⁶.

No obstante, no puede afirmarse que haya existido una transferencia directa de esta regla del Derecho Internacional clásico a la esfera del derecho internacional de los derechos humanos. En cierta forma, puede entenderse que, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la exigencia de este requisito es la contrapartida del reconocimiento del derecho de petición individual⁷.

El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptado el 2 de mayo de 1967, fue el primer instrumento que la habilitó para conocer de peticiones individuales, estableciendo que deberá verificarse, como medida previa, que los procesos y recursos internos del Estado hayan sido debidamente aplicados y agotados⁸.

Entonces si bien los Estados han permitido a individuos denunciar violaciones de derechos humanos ante la Comisión, ello ha sido a condición de que el peticionante haya agotado los recursos disponibles en la jurisdicción local. Pero esta regla conlleva, además, la obligación de los Estados miembros de la Convención Americana de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas, y a toda persona contra actos que violen sus derechos fundamentales⁹.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, Opinión Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, párrafos 36.

5 Conf. FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. 2004. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos institucionales y procesales. San José. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 3ra edición, p. 293 y 294.

6 Corte Internacional de Justicia, Interhandel case (Switzerland v. United States of America), Preliminary Objections, sentencia del 21 de marzo de 1959, I.C.J. Reports, p. 27.

7 Conf. CANÇADO TRINDADE, Antônio A. 1986. El agotamiento de los recursos internos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. IV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. San José. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del 18 al 30 de agosto de 1986.

8 Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1967, artículo 49.

9 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25.

De esta manera, el requisito no debe ser receptado como una medida dilatoria o un mero privilegio a disposición del Estado, sino que debe ser concebido en beneficio del individuo, como forma de una pronta reparación de sus derechos humanos vulnerados.

El objetivo de la institución en el sistema interamericano.

Al igual que en el Derecho Internacional clásico, la *raison d'être* de esta institución en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es que no se sometan a fueros internacionales denuncias que podrían ser satisfechas en la jurisdicción interna del Estado. El fundamento es que no pueden considerarse como violaciones de los derechos humanos a reclamaciones que están en condiciones de ser resueltas en el ámbito doméstico estatal, ya que como hemos expresado anteriormente, los mecanismos de protección del derecho internacional son subsidiarios del derecho interno, quedando reservados para los casos en que no existan recursos jurisdiccionales disponibles, o que los que hayan sean inadecuados o ineficaces.

El propio preámbulo de la Convención establece que los derechos esenciales de las personas no surgen del hecho de ser nacional de un determinado Estado sino que son atributos propios de la persona humana, por lo que justifican una protección internacional de carácter coadyuvante o complementaria de la que establece el derecho interno de cada Estado Parte. Concordante con ello, la Corte Interamericana ha expresado que la regla por la cual se exige el agotamiento previo de los recursos internos está concebida en interés de los Estados, ya que busca dispensarlos de responder ante órganos internacionales por actos que se le imputen, antes de haber tenido la posibilidad de remediarlos por sus propios medios en la jurisdicción doméstica¹⁰.

Este criterio de la Corte ha sido desarrollado con mayor claridad posteriormente, afirmando que el previo agotamiento de los remedios internos permite al Estado resolver las violaciones según su propio derecho interno antes de enfrentarse a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser esta coadyuvante o complementaria de la interna como bien lo establece la Convención Americana en su Preámbulo. Por su parte, la Comisión Interamericana también ha tenido oportunidad de expresarse sobre la materia, señalando que la regla del previo agotamiento de los recursos internos tiene como consecuencia que la competencia de la Comisión es esencialmente subsidiaria¹¹.

Su naturaleza jurídica.

Una cuestión central de esta institución es definir si el previo agotamiento de los recursos internos constituye un requisito o condición de admisibilidad de la petición individual, que debe acreditarse para que la misma sea declarada admisible, o por el contrario, es un derecho del Estado denunciado, que para hacerlo valer debe invocarlo en forma explícita. Del artículo 46.1, letra a) de la Convención, surge que para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que en principio nos conduce a considerar que estamos frente a una condición objetiva de admisibilidad de la petición o comunicación, y por ello exigible al peticionante independientemente de la actitud que tome el Estado denunciado¹².

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto Viviana Gallardo y otras, decisión del 13 de noviembre de 1981, párrafo 26.

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución N° 15/89, Caso N° 10.208, República Dominicana, adoptada el 14 de abril de 1989, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1988-1989, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1989, p. 122.

12 Esta tesis fue sostenida por el Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pier Paolo Pasceri Scaramuzza, en los votos disidentes emitidos en los casos Ríos y otros; y Perozo y otros, ambos contra Venezuela, del 28 de enero de 2009. El

Sin embargo, resaltamos que el artículo 46.1, letra a) de la Convención exige que se hayan interpuestos y agotados los recursos de jurisdicción interna, 'conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos', lo cual nos lleva a profundizar el análisis y pensar si según estos principios, la regla debería ser considerada como un derecho del Estado denunciado, y no como un requisito o condición de admisibilidad de la petición o comunicación. Esta cuestión, se planteó por primera vez en el sistema interamericano en el Asunto Viviana Gallardo y otras, que el propio gobierno de Costa Rica sometió a la Corte haciendo renuncia expresa del cumplimiento del previo agotamiento de los recursos internos.

La Corte Interamericana afirmó en esa oportunidad, que conforme los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y según la práctica internacional, la regla por la cual se exige el agotamiento previo de los recursos internos está concebida en interés del Estado, ya que busca dispensarlo de responder ante órganos internacionales por actos que se le imputen, antes de haber tenido la posibilidad de remediarlos en la jurisdicción doméstica. De esta manera, se le ha considerado como un medio de defensa de los Estados, y por ende renunciable, incluso de modo tácito. Además, la renuncia una vez producida es irrevocable. Asimismo, la Corte citó en su decisión la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de 18 de junio de 1971 en los casos De Wilde, Ooms y Versyp.

Las características de los recursos que deben agotarse.

En primer lugar, los recursos que el artículo 46.1 de la Convención Americana requiere agotar son aquellos de la jurisdicción interna, refiriéndose a los remedios que se someten al conocimiento de un juez, u otra autoridad judicial, conforme a los procedimientos establecidos en las leyes, y cuyas resoluciones son vinculantes para las partes del proceso. De esta manera, quedan excluidas las peticiones que puedan interponerse ante organismos administrativos, ya que éstos carecen de las características antes mencionadas. En el caso Loayza Tamayo, en el escrito de observaciones a las excepciones preliminares, la Comisión aclaró que los recursos en los términos del artículo 25 de la Convención no son los planteados ante el Ministerio Público, por ser éste un órgano ajeno al poder judicial¹³.

Cabe agregar, que no deben agotarse absolutamente todos los recursos jurisdiccionales existentes en el derecho interno del Estado, sino solamente aquellos que sean aptos para reparar el daño por el cual se peticona. En su jurisprudencia constante, la Corte ha diferenciado los recursos ordinarios de los extraordinarios, estableciendo que la regla exige agotar únicamente los primeros. En este orden de ideas, el recurso de revisión es un recurso extraordinario que no tiene la virtualidad ni la eficacia jurídica como para ser considerado un recurso jurisdiccional de aquellos que el peticionario tenga la obligación de agotar, por atender exclusivamente a las consecuencias del proceso, impidiendo al que lo interponga lograr una justa composición del daño producido¹⁴.

Asimismo, los remedios disponibles en la jurisdicción interna deben ser agotados en forma íntegra, no bastando para la admisibilidad de una petición la decisión de un mero incidente en el marco de un procedimiento que aún se encuentra en trámite, o con una sentencia interlocutoria que no dé por concluido al mismo. En la denuncia formulada por Salvador Jorge Blanco contra la República Dominicana, país del que fuera presidente, la Comisión declaró inadmisibile la petición por no haberse agotado los recursos internos. Los recursos

mismo argumento fue esgrimido por el Juez ad hoc Einer Elias Biel Morales, en su voto disidente en el caso Reverón Trujillo, del 30 de junio de 2009.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 37, letra a).

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Furlan y familiares, sentencia del 31 de agosto de 2012, párrafo 27.

agotados por el reclamante se referían a incidentes que surgen del curso del procedimiento, que si bien tienen relación con la causa principal, no agotan la vía interna por no producir sentencia definitiva en el caso, basada en la autoridad de cosa juzgada.

En segundo lugar, la regla exige el agotamiento de los recursos internos del Estado al cual se denuncia como responsable de la violación de los derechos humanos. Cabe recordar el caso producto de la acción militar en Panamá por parte de los Estados Unidos en diciembre de 1989, con intenciones de derrocar a Manuel Antonio Noriega, en la cual Estados Unidos alegaba la inadmisibilidad de la denuncia ante la Comisión por no haberse agotado los recursos internos de la jurisdicción de Panamá. Sin embargo, la Comisión resaltó que los recursos que deben agotarse son aquellos del sistema jurídico del Estado denunciado como presunto responsable de la violación, que en ese caso era precisamente Estados Unidos¹⁵.

Por otra parte, para que exista la obligación de agotar los recursos disponibles, estos deben poseer, además, características que lo conciban como un remedio lógico a la situación jurídica infringida. Conforme el artículo 46.1 letra a) de la Convención Americana, se requiere que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna 'conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos', lo que conduce a considerar no solo la existencia formal de los recursos internos, sino además que estos sean adecuados y efectivos, como deviene de las excepciones estipuladas en el artículo 46.2 de la Convención¹⁶.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que los recursos disponibles en sede interna sean adecuados significa que su función dentro del derecho interno del Estado sea idónea para proteger la situación jurídica infringida¹⁷. En la jurisdicción doméstica de los Estados existen múltiples recursos, sin embargo no son todos ellos aplicables ante toda circunstancia fáctica, debiendo ser agotados solo aquellos recursos adecuados para el caso específico. Esta conclusión deriva del principio de que la norma debe estar encaminada a producir un efecto útil y por ello su resultado no puede ser manifiestamente absurdo o irrazonable.

A la luz del criterio sostenido por la Corte, para que exista el deber de agotar un recurso este debe ser eficaz, entendiendo por ello que tenga capacidad para producir el resultado para el que haya sido concebido¹⁸. La mera existencia formal de los recursos no basta para considerarlos efectivos, ya que los mismos además deben brindar soluciones a las violaciones de los derechos contemplados en la Convención. La ineficacia de un recurso puede derivar de exigencias procesales que lo tornen inútil o inaplicable para el caso determinado. De acuerdo con la Corte, es obligación del Estado crear las condiciones necesarias para que los recursos disponibles puedan tener resultados efectivos¹⁹.

Las excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos internos.

En principio, podemos afirmar que existe una presunción *iuris tantum* de que los recursos de la jurisdicción interna están disponibles, siendo los mismos adecuados y efectivos. La propia Corte ha rechazado presumir con ligereza que un Estado Parte de la Convención, haya incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces a las víctimas de actos que violen sus derechos fundamentales. Sin embargo, la regla del previo agotamiento de los recursos de sede interna no puede erigirse como un obstáculo insalvable para los reclamantes, que les impida el acceso a la Comisión Interamericana a las personas que hayan sido vulneradas

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 31/93, Caso N° 10.573, Estados Unidos, del 14 de octubre de 1993, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1994, p. 241 y siguientes.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 63.

17 *Ibidem*, párrafo 64.

18 *Ibidem*, párrafo 66.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio, sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 127.

en sus derechos fundamentales.

De esta manera, la Convención en el párrafo 2 del artículo 46, establece que las comunicaciones individuales quedan exentas de cumplir la regla mencionada en los siguientes supuestos: a) que en la legislación interna del Estado de que se trata no exista el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o se le haya impedido agotarlos; c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. En cuanto a la segunda excepción prevista en el artículo, ésta contempla dos hipótesis distintas. Por un lado, no permitir el acceso a los recursos; y por el otro, que haya sido impedido de agotarlos.

Debe tenerse presente que los Estados tienen la obligación convencional de proporcionar recursos internos adecuados y efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, por lo que de hacer lugar la Corte Interamericana a cualquiera de las excepciones contempladas, como son, por ejemplo, la ineffectividad de los recursos o la inexistencia del debido proceso legal, importa atribuir al Estado una nueva violación de la Convención distinta de la alegada en el caso particular y que concurre con ella. En estas circunstancias, la cuestión derivada de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo de la petición²⁰.

La inexistencia del debido proceso legal, refiere a los casos en los cuales no existen las garantías judiciales propias a la administración de justicia, contenidas fundamentalmente en el artículo 8 de la Convención. Estas garantías suponen un tribunal independiente e imparcial, y se refieren a las características del procedimiento y demás circunstancias esenciales para procurar una adecuada protección de los derechos u obligaciones sometidas a consideración judicial. Los Estados no solo se encuentran obligados convencionalmente a ofrecer recursos judiciales efectivos, sino que además deben garantizar que éstos se sustancien conforme las normas del debido proceso legal, para la salvaguarda de los derechos humanos.

Sin embargo, para que sea procedente esta excepción no es requisito necesario la ausencia o ruptura del Estado de Derecho, sino que implica la inexistencia de las debidas garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos consagrados en la Convención para el caso particular sometido a consideración. No obstante, el quiebre absoluto del Estado de Derecho, configura una situación de extrema gravedad institucional que claramente habilita a la Comisión para tomar un caso en el que no se hayan agotados los recursos internos, basada en la inexistencia del debido proceso legal, por ser evidente que en tales circunstancias el reclamante no podría lograr una protección efectiva de sus derechos por parte de los organismos jurisdiccionales domésticos.

La primera parte del artículo 46.2, literal b) de la Convención, supone que no se le haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna en el caso determinado. Por ende, esta excepción implica una práctica del Estado que imposibilita al peticionario acceder a tales recursos. La Comisión ha admitido quejas en las cuales las víctimas no habían denunciado las violaciones ante los tribunales internos por el temor fundado de sufrir una experiencia similar a la ya padecida, junto con la inoperancia del poder judicial producto de la corrupción en este poder público y su falta de independencia, lo que llevaba a la conclusión que la excepción a la regla del previo agotamiento de los recursos internos era procedentes para el caso²¹.

La segunda parte del literal b), del artículo 46.2 de la Convención, se refiere a la imposibilidad por parte del

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 91.

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 5/94, Caso 10.574, El Salvador, adoptado el 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1994, p. 187 y siguientes.

reclamante de agotar los recursos efectivos ante los organismos jurisdiccionales. La Comisión ha establecido que en los casos que las autoridades judiciales no sean eficientes o muestren indecisión en resolver las investigaciones en torno a violaciones de los derechos fundamentales de las personas, no resulta aplicable el requisito del agotamiento de los recursos internos exigido por la Convención. Estos hechos y prácticas, demuestran la existencia de una política ordenada o tolerada por el poder público, y cuyo fin es impedir la utilización de los recursos internos para la protección de los derechos humanos²².

La regla previo agotamiento de los recursos internos no puede llevar a que se demore o se detenga hasta tornar inútil la protección internacional de la víctima en estado de indefensión. Si bien la Comisión Interamericana no ha aclarado los criterios necesarios para determinar si existe un retardo injustificado en la decisión de un recurso, lo que deberá apreciarse en cada caso en concreto conforme las circunstancias particulares del mismo, ésta ha establecido que cuando la investigación interna del caso sufra una dilación injustificada, la falta de agotamiento de los recursos internos no puede ser alegada por el Estado para suspender o evitar el trámite de una petición ante la misma Comisión²³.

El desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana.

Por último, debemos agregar que la Corte ha adoptado un criterio amplio y flexible entorno a las excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos internos, insinuando que las previstas en el artículo 46.2 de la Convención son meramente ilustrativas -y por ende no taxativas- abriendo la posibilidad para la consideración de nuevas excepciones. En este marco, a solicitud de la Comisión, la Corte emitió una opinión consultiva referida a las excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículos 46.1, 46.2a, 46.2b de la Convención), expidiéndose acerca de dos situaciones concretas: la de un indigente que debido a las circunstancias económicas no puede hacer uso de los recursos jurídicos del país; y la del individuo que no puede obtener un representante legal por temor generalizado en los círculos jurídicos del país.

La Corte señaló que el mero hecho que una persona sea indigente no significa que ésta no deba agotar los recursos internos, pero interpretando el artículo 46.2 a la luz de la parte final del artículo 1.1 de la Convención, la Corte entendió que al prohibirse a los Estados discriminar por diversas razones, entre ellas la posición económica, si una persona requiere asistencia jurídica efectiva para la protección de un derecho amparado por la Convención y su indigencia le impide obtenerla, queda relevado del agotamiento de los recursos internos. En cuanto al segundo supuesto, la Corte determinó que en caso de existir miedo generalizado por parte de los abogados para brindar asistencia legal a un individuo que lo requiere, y por consiguiente éste no puede obtenerla, la persona queda relevada de agotar los recursos internos²⁴.

Conclusión.

Para finalizar este trabajo queremos remarcar la trascendencia vital que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene para lograr la construcción de una sociedad democrática efectiva, respet-

²² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 9/94, Casos 11.105, 11.107, 11.110, 11.111, 11.112, 11.113, 11.114, 11.118, 11.120, 11.122 y 11.102, Haití, adoptado el 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1994, p. 312 y siguientes.

²³ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 1/92, Caso 10.235, Colombia, adoptado el 6 de febrero de 1992, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1992, p. 42.

²⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento de los recursos internos, Opinión Consultiva OC-11/90, del 10 de agosto de 1990, párrafos 31 y 35.

uosa de los derechos fundamentales de las personas, principalmente en nuestro continente que posee una historia marcada por gobiernos autoritarios y por la comisión de graves violaciones a los derechos esenciales del hombre. Por ello, creemos fundamental un avance hacia un mejor funcionamiento del sistema, dotado de una mayor efectividad y accesibilidad, no solo a través de la promoción y protección internacional de los derechos humanos, sino también por medio del compromiso de los Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de toda persona sujeta a su jurisdicción.

La regla del previo agotamiento de los recursos internos, dentro del sistema interamericano de derechos humanos, no debe ser receptada como una herramienta que favorezca la impunidad, y no puede ni debe ser utilizada como una medida dilatoria o un mero privilegio en favor de los Estados, que se han comprometido libre y soberanamente a salvaguardar los derechos y garantías de las personas. Así, tanto por medio de fallos en materia contenciosa, como a través de opiniones consultivas, la Corte ha avalado el criterio flexible y amplio utilizado por la Comisión en la faz de admisibilidad de las peticiones individuales sometidas a su decisión. El requisito del previo agotamiento de los recursos internos como vía de acceso a instancias internacionales, debe ser siempre concebido en beneficio del individuo, en aras de una pronta reparación de sus derechos vulnerados.

Por último, los Estados tienen la obligación de realizar sus mayores esfuerzos en hacer cada vez más eficaces sus sistemas judiciales y todo lo relativo a la administración de justicia dentro de su territorio, para una mejor protección de los derechos y libertades fundamentales. Entonces la satisfacción de los derechos humanos de las personas vendrá por medio de la promoción de medidas de acción positiva por parte de los Estados, que garanticen los derechos consagrados en las leyes, los tratados y las constituciones; y no por vía de quejas individuales ante organismos internacionales, interpuestas por víctimas que ya han visto conculcados sus derechos esenciales y les queda como única alternativa para lograr la reparación de las violaciones sufridas en el fuero interno, acceder a los sistemas internacionales de control y protección de los derechos humanos.

Bibliografía.

CANÇADO TRINDADE, Antônio A. 1986. El agotamiento de los recursos internos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. IV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. San José. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. 2004. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos institucionales y procesales. San José. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 3ra edición.

PINTO, Mónica. 1993. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos Aires. Argentina: Editores del Puerto S.R.L.

SALVIOLI, Fabián. 1997. Derechos, acceso y rol de las víctimas. El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. San José. Costa Rica: IIDH.